



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1989/SR.23
31 de octubre de 1989

ESPAÑOL
Original: FRANCES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

45° período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 23a. SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el miércoles 15 de febrero de 1989, a las 10 horas

Presidente: Sr. BOSSUYT (Bélgica)

SUMARIO

Informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías sobre su 40° período de sesiones (continuación)

Ulterior promoción y fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales con inclusión de la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la Comisión; distintos enfoques y medios posibles dentro del sistema de las Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales; instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del presente período de sesiones se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

GE.89-10791/3579E

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

INFORME DE LA SUBCOMISION DE PREVENCION DE DISCRIMINACIONES Y PROTECCION A LAS MINORIAS SOBRE SU 40° PERIODO DE SESIONES (tema 19 del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/3-E/CN.4/Sub.2/1988/45, E/CN.4/1989/51, E/CN.4/1989/67, E/CN.4/1989/NGO/14, E/CN.4/1989/NGO/17)

ULTERIOR PROMOCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES CON INCLUSION DE LA CUESTION DEL PROGRAMA Y LOS METODOS DE TRABAJO DE LA COMISION; DISTINTOS ENFOQUES Y MEDIOS POSIBLES DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA MEJORAR EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES; INSTITUCIONES NACIONALES DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS (tema 11 del programa) (continuación) (E/CN.4/1989/3-E/CN.4/Sub.2/1988/45 (cap. I, sec. A, resolución I), E/CN.4/1989/20, 21 y 47, E/CN.4/1989/CRP.1 y CRP.2; A/RES/43/12)

1. El Sr. ROSSI (Asociación Internacional de Defensa de la Libertad Religiosa), que hace uso de la palabra en relación con el tema 19, agradece a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías el interés que manifiesta por la libertad de pensamiento, conciencia y religión y las dos resoluciones y la decisión que somete a la aprobación de la Comisión (resoluciones 1988/15 y 32 y decisión 1988/112). Se limitará a hacer un comentario sobre la resolución 1988/15 relativa a las violaciones del derecho a la libertad de religión en Albania.

2. En ese texto la Subcomisión pide en particular a la Comisión que inste al Gobierno de Albania a que establezca medidas constitucionales y jurídicas adecuadas con miras a garantizar en el país la seguridad de la libertad de religión o creencias en forma concreta. El orador recuerda que Albania es el único país del mundo que ha suprimido totalmente la libertad de religión; todas las organizaciones y actividades religiosas están prohibidas por la Constitución y se castiga severamente a los contraventores. Sacerdotes y creyentes van a la cárcel o se ven condenados a trabajos forzados por motivos religiosos. Esta situación dura desde hace más de 20 años.

3. Sin embargo, cabe señalar algunos indicios de cambio. Por ejemplo, Ramiz Alia, Secretario General del Partido Comunista de Albania y Presidente de la República Albanesa, parece haber declarado que "no se debería encarcelar ni castigar a la gente por rezar en sus casas". Hace poco salió en libertad el obispo católico Monseñor Nikoll Troshani, detenido en 1964 por haber celebrado servicios religiosos. Parece que son muchos los sacerdotes puestos en libertad. El reverendo Arthur E. Liolin, canciller de la diócesis ortodoxa albanesa en los Estados Unidos, visitó Albania en agosto de 1988 y pudo hablar con los habitantes con toda libertad. Asimismo, en el verano de 1988, el imám Vehbi Ismail, director del Centro Islámico Albanés de Detroit, Estados Unidos, también recibió autorización para entrar en Albania y pudo conversar libremente con los albaneses.

4. Pese a esos indicios, la comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión sobre las autoridades albanesas, sobre todo para hacerles entender que tienen el deber de respetar el derecho a la libertad de religión. El orador subraya que el reconocimiento de ese derecho no es en absoluto incompatible con la ideología marxista-leninista que profesan los dirigentes albaneses. De hecho, ni Marx ni Lenin se oponían a la libertad de conciencia y de religión.

Cabe citar la denuncia hecha por Lenin de los ataques a la libertad de religión en la Rusia de los zares: "... En Rusia... siguen en vigor leyes vergonzosas, dirigidas contra las personas de otra fe, contra los no ortodoxos, contra los cismáticos, los sectarios, los judíos... No sólo cada cual debe tener plena libertad para profesar la fe que desee, sino también para propagar cualquier religión o cambiar de fe". (Traducción, Obras Completas, edición francesa, vol. 6, págs. 419 y 420.) Además, Lenin incorporó en la primera Constitución de la URSS un artículo que garantiza "la libertad de conciencia, así como la libertad de propaganda religiosa y antirreligiosa".

5. Desde luego, los dirigentes albaneses no pueden considerar a Lenin como a un "revisionista". Sin dejar de ser marxistas-leninistas, esos dirigentes tienen, pues, la posibilidad y el deber de abolir en la Constitución la vergonzosa prohibición de las actividades de las organizaciones religiosas. El orador desea que las delegaciones de los países socialistas se sumen a las demás delegaciones para aprobar la resolución 1988/15 de la Subcomisión. Con ello reforzarán su credibilidad frente a los demás países en su apoyo a la propuesta de que se elabore un instrumento internacional obligatorio sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

6. El Sr. TARDU (Centro Internacional de Investigaciones y Estudios Sociológicos, Penales y Penitenciarios) señala que en el informe de la Subcomisión (E/CN.4/1989/3) se encuentran proyectos normativos de gran importancia en las esferas de que se ocupa su organización. En primer lugar, el proyecto de declaración sobre la independencia del poder judicial elaborado por el Sr. Singhvi (resolución 1988/25 de la Subcomisión) constituye un análisis particularmente profundo de esas cuestiones. Se establecen las condiciones concretas de la independencia de los jueces y los abogados en todos los regímenes políticos, económicos o ideológicos: garantías con respecto a los sueldos, las pensiones, contra los traslados arbitrarios, etc. El texto representa un avance considerable respecto de los anteriores, que no duplica en absoluto.

7. En su resolución 1988/11, sobre la indemnización a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, la Subcomisión reconoció que todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos tendrían derecho a reparación y a una indemnización, lo cual no tiene precedentes. La Subcomisión decidió seguir examinando esta cuestión en su período de sesiones de 1989. El principio fundamental de la reparación se aplicaría a todos los tipos de violaciones flagrantes, que ya están bien definidos por la jurisprudencia, así como por los estudios de las Naciones Unidas, y se impondría a todas las entidades interesadas: personas físicas, grupos, gobiernos y, en última instancia, organizaciones internacionales. Se trata de un avance necesario habida cuenta del recrudecimiento de las violaciones masivas de los derechos humanos en todo el mundo y de las lagunas que se advierten en esta esfera del derecho internacional, en el que no existen sino normas fragmentarias.

8. Con respecto al proyecto de resolución VI y a la resolución 1988/28 de la Subcomisión, sobre un proyecto de declaración acerca de la protección de los enfermos mentales, el orador subraya que la cuestión es delicada y tiene un trasfondo político muy importante. El proyecto presentado contiene lagunas,

así como disposiciones demasiado imprecisas para proteger contra la arbitrariedad a los enfermos mentales internados (por ejemplo, las que figuran en el párrafo 2 del artículo 5). De momento, sólo se invita a la Comisión a pedir al Secretario General que solicite las observaciones de los Estados y las instituciones; ello dará el tiempo necesario para revisar el texto con miras a garantizar una protección más eficaz a los enfermos mentales internados.

9. En cuanto al proyecto del Sr. Joinet de principios rectores de la utilización de ficheros computadorizados de datos personales (E/CN.4/Sub.2/1988/22), que constituye el tema del proyecto de resolución VII, es una síntesis interesante, pero suscita algunas reservas. En particular, el principio 7 parecería dejar demasiado terreno para las excepciones del principio de acceso de los interesados, excepciones que se justificarían por motivos de "seguridad nacional" o "moral pública". El orador desearía que el Relator Especial se sirviera revisar su texto antes de la fase final de examen en la Asamblea General.

10. Por último, el orador elogia la excelente labor de la Subcomisión, sus relatores especiales y sus grupos de trabajo sobre la detención, las desapariciones, las prácticas tradicionales que afectan la salud de la mujer y el niño y el estatuto reconocido al individuo en el derecho internacional contemporáneo.

11. El Sr. HADJAR (Libération) pide a la Comisión de Derechos Humanos que tome una iniciativa este año para proteger a los millones de personas que son víctimas en Indonesia de un sistema de discriminación tan perverso como persistente. Se trata de miembros o simpatizantes presuntos del Partido Comunista de Indonesia (PKI) o de otras organizaciones de izquierda que quedaron prohibidas después de la llegada del Ejército al poder, en 1965.

12. Según cifras oficiales de 1988, el número total de víctimas de esta discriminación ascendía a 1.410.333. Hay que añadir un número incalculable de personas relacionadas con ellas por vínculos de sangre o de matrimonio, que también son víctimas del mismo sistema indigno. A la mayor parte de esas personas se las ha encarcelado sin procesamiento ni juicio durante muchos años. Por fin salieron en libertad a fines del decenio de 1970, pero todavía se les niegan los derechos civiles elementales: el derecho a emplearse en la administración pública u otros sectores, el derecho de ejercer su antigua profesión, la libertad de desplazamiento dentro del país y de salir al extranjero, el derecho a afiliarse a un partido político, a una cooperativa o a cualquier otra organización, etc. Esas personas han perdido asimismo su derecho a percibir una pensión y, además, están obligadas a presentarse periódicamente a las autoridades civiles y militares.

13. Hasta 1980 una norma oficial exigía para trabajar en el sector público y en otros sectores calificados de "vitales" un certificado de "depuración" política (clearance), que se denegaba automáticamente a los ex presos y a los "simpatizantes comunistas", así como a sus descendientes. Desde 1980 ya no se exigen esos certificados, pero en cambio han sido reemplazados por un sistema de "selección mental e ideológica", que sigue aplicándose actualmente. En septiembre de 1988, el Ministro coordinador de los asuntos políticos y de seguridad precisó que ese control abarcaba el medio familiar, las relaciones "dominantes", la conducta, etc. A este respecto el orador cita el Jakarta Post del 9 de septiembre de 1988.

14. La aplicación de ese sistema corre a cargo de los organismos de seguridad regionales y locales y, principalmente, a un organismo central denominado "Bakorstanas". El jefe de esa organización en Java oriental ha indicado cuáles eran los criterios de la selección mental e ideológica en su región en una declaración al Surabaya Post del 4 de enero de 1989, que el orador cita. En esa declaración se afirmaba, en particular, que entre las personas rechazadas figuraban aquellas cuyo "ambiente" estaba relacionado directa o indirectamente con una organización prohibida como el PKI, aunque no simpatizaran con esa organización.

15. A continuación, el orador da algunos ejemplos recientes de la "purga" constante que resulta de ese sistema de examen selectivo. Así, en enero de 1989, se anularon los nombramientos de 140 profesores asignados a establecimientos de Lampung, como señaló el periódico Tempo del 21 de enero. El Ministro de Información anunció que a los periódicos que emplearan a antiguos periodistas del PKI o a los periodistas cuyo ambiente era "malsano" se les anularía la licencia de publicación (Tempo, 15 de octubre de 1988). El Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos anunció que el criterio de un "ambiente sano" era primordial en la selección de los cargos sindicales a todos los niveles (Suara Pembaruan, 21 de septiembre de 1988). Varios miembros de la Primera Comisión Parlamentaria señalaron que se había cesado a un número indeterminado de funcionarios de Java central por carecer de certificado de "ambiente sano" y que en Java oriental se había comprobado que los hijos de ex presos políticos evitaban solicitar el ingreso en las escuelas secundarias porque sabían que no obtendrían los certificados necesarios o que no conseguirían empleo al final de sus estudios (Kedaulatan Rakyat, 6 de septiembre de 1988).

16. El orador pide a la comunidad internacional que se ocupa de los derechos humanos que intervenga en favor de los millones de personas que siguen siendo víctimas de persecuciones y medidas de discriminación en Indonesia sin haber sido jamás juzgadas culpables de un delito. La Comisión de Derechos Humanos debería nombrar un relator especial para estudiar esta situación e invitar al Gobierno de Indonesia a rehabilitar a todas las personas sospechosas de haber pertenecido a organizaciones prohibidas en 1965, así como a anular todas las normas que atentan contra sus derechos civiles.

17. El Sr. MACPHERSON (Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos), cuya organización representa a los cuáqueros de todo el mundo, comenta el informe de la Subcomisión (E/CN.4/1989/3) y destaca la importancia del papel que ésta desempeña en la elaboración de normas y la protección de los grupos de población particularmente vulnerables (minorías, pueblos indígenas, niños, mujeres, etc.). Sin embargo, las resoluciones que se aprueban en la Subcomisión no reflejan siempre el contenido de los debates celebrados sobre las violaciones flagrantes de los derechos humanos. Una mejora que se podría aportar consistiría en examinar los proyectos de resolución sobre diferentes situaciones nacionales antes de pasar a los debates relativos a la resolución 1503 (XLVIII); también convendría que la Subcomisión presentara a la Comisión un informe anual sobre las violaciones de los derechos humanos señalando a su atención la evolución de las situaciones.

18. Además, hay en la Subcomisión algunos obstáculos a la participación de las organizaciones no gubernamentales. En particular, ha habido dificultades en la distribución de la documentación a los miembros de la Subcomisión;

este problema podría resolverse rápidamente si se atribuyera a cada miembro un casillero cerca de la sala de conferencias. Por último, el orador desea que se examine la manera en que se podrían aumentar las posibilidades de los grupos de trabajo, ya que su contribución es utilísima.

19. En su 40° período de sesiones la Subcomisión decidió transmitir a la Comisión un proyecto de protocolo facultativo sobre la abolición de la pena de muerte (E/CN.4/Sub.2/1987/20). Esta decisión se adoptó sin votación, al final de un debate constructivo y estimulante. Por su parte, los cuáqueros desean la abolición de la pena de muerte porque esa sanción viola el carácter sagrado de la vida humana y niega la capacidad de la persona para cambiar. Esperan que todos los países pasen a ser abolicionistas cuando se convenzan de que, además, esa pena no es necesaria. Un protocolo facultativo permitirá a los Estados comprometerse a abolir la pena de muerte mediante la ratificación de un instrumento internacional; los Estados que no deseen ratificarlo no estarán obligados a hacerlo. La organización del orador espera que la Comisión transmita el proyecto a la Asamblea General para su aprobación.

20. La Sra. SCIUTO (Amnistía Internacional) declara que su organización, que sigue con atención especial los trabajos de la Subcomisión, celebra particularmente que ésta haya decidido por consenso, en su 40° período de sesiones, transmitir a la Comisión el proyecto de segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con miras a la abolición de la pena de muerte. Esa decisión se tomó tras haberse examinado un informe detallado del Sr. Bossuyt, actual Presidente de la Comisión (E/CN.4/Sub.2/1987/20).

21. Amnistía Internacional se ha fijado como objetivo la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Se siente alentada por la tendencia general que se manifiesta a ese respecto. En la actualidad, 35 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 18 lo han hecho salvo para los crímenes de guerra o los excepcionales. De ese total de 53 países, 43 han abolido la pena de muerte desde el final de la segunda guerra mundial, entre ellos países del África y del Pacífico de reciente independencia y países que acababan de atravesar períodos de represión política. Además, en otros 27 países o territorios donde la pena de muerte sigue estando en vigor no ha habido ejecuciones desde hace por lo menos 10 años. Así pues, unos 80 países —es decir, casi la mitad de los países del mundo— son abolicionistas de derecho o de hecho. En otros países el número de ejecuciones ha descendido a una o dos por año, con lo cual la pena de muerte prácticamente ya no se considera como un instrumento del aparato jurídico penal. O sea, que sólo sigue aplicándose extensamente en un número reducido de países.

22. Ya en 1971 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2857 (XXVI), afirmó que "el objetivo principal que debe buscarse es reducir progresivamente el número de delitos a los que se pueda imponer la pena capital, habida cuenta de la conveniencia de abolir esa pena en todos los países". La Asamblea reafirmó ese objetivo en su resolución 32/61, de 8 de diciembre de 1977. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos enuncia importantes restricciones en cuanto a la aplicación de la pena de muerte y estipula, en el párrafo 6 del artículo 6 que: "ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital".

El Relator Especial ha señalado que el Comité de Derechos Humanos había estimado, en sus comentarios, que del artículo 6 del Pacto se desprendía que la abolición era de desear.

23. En el plano regional también se deriva una tendencia abolicionista de la aprobación del Protocolo N° 6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1985 y ha sido ratificado por más de la mitad de los Estados miembros del Consejo de Europa, así como de que por primera vez en 1987 se presentara al examen de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos un proyecto de protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

24. Aunque el restablecimiento de la pena de muerte por un país que la ha abolido oficialmente sea un hecho sumamente raro, la existencia de un instrumento internacional como el proyecto de protocolo facultativo de las Naciones Unidas ayudará también a los países a resistir a las posibles presiones para hacerlo. En general, con ese texto, el derecho internacional pondría el primer hito en la vía hacia el abolicionismo integral. Amnistía Internacional pide a la Comisión que transmita sin demora el proyecto al Consejo Económico y Social con miras a su aprobación por la Asamblea General.

25. El Sr. LACK (Comité de Coordinación de Organizaciones Judías - Congreso Judío Mundial) aclara que también interviene en nombre de la Comisión Andina de Juristas, la Comisión de las Iglesias para los Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo de los Cuatro Vientos, la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, la Asociación Internacional de Abogados, la Comisión Internacional de Juristas, el Consejo Internacional de Mujeres, el Consejo Internacional de Mujeres Judías, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Federación Mundial de Mujeres Metodistas, la Federación Internacional de Abogadas, el International Institute of Higher Studies for Criminal Science (Instituto Internacional de Estudios Superiores de Ciencia Penal), la Liga Internacional para los Derechos y la Liberación de los Pueblos, el Grupo pro Derechos de las Minorías, Pax Christi, la Organización Internacional de Mujeres Sionistas y Zonta Internacional.

26. Recuerda que, en su último período de sesiones, la Subcomisión adoptó varias iniciativas importantes a partir de la labor realizada por los grupos de trabajo y con ayuda de las organizaciones no gubernamentales. En el marco de las labores del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas se reunieron 380 personas para examinar el problema relativo a esas poblaciones y estudiar un importante proyecto de declaración sobre los derechos que les corresponden. Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre las formas contemporáneas de la esclavitud ha estudiado la esclavitud y la trata de personas y ha establecido un programa de actividades para los próximos años.

27. Dos grupos de Trabajo del período de sesiones han elaborado nuevos instrumentos importantes. El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de las personas recluidas por mala salud mental o porque padecen trastornos mentales ha examinado y mejorado el proyecto de conjunto de principios y garantías para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental. En cuanto al Grupo de Trabajo sobre Detención y Prisión, ha examinado cuestiones tan diversas como la detención de funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, la privatización de las prisiones,

la detención preventiva, la ejecución de adolescentes y la libertad de expresión, y ha trabajado en el anteproyecto de declaración sobre la desaparición de personas.

28. La utilísima labor de los dos grupos de trabajo del período de sesiones se ha desarrollado casi en su totalidad fuera del tiempo asignado oficialmente a esos grupos. Ello plantea la cuestión del programa de la Subcomisión. Parece aconsejable que ésta vuelva a examinar su programa para que elimine las cuestiones que se repiten inútilmente, en parte o en su totalidad, en los trabajos de la Comisión. En efecto, el programa de la Subcomisión se encuentra actualmente tan recargado que, cuando uno de los expertos realiza un estudio, los otros expertos no suelen tener el tiempo necesario para examinarlo como corresponde, analizarlo o proponer modificaciones. Si la Subcomisión dispusiera de más tiempo, podría examinar más a fondo los problemas que, efectivamente, exigen conocimientos de expertos, como la importancia y la significación de los tratados celebrados con los pueblos indígenas, los derechos humanos y el SIDA, la libertad de expresión, la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, los problemas de las minorías, el derecho humanitario en el marco de los conflictos armados y los aspectos fundamentales de la relación existente entre los derechos humanos, el derecho de asilo y el estatuto de los refugiados. Deberían elegirse temas que no se presten a polémicas de carácter ideológico ni geopolítico.

29. También hay que estimular a los gobiernos para que respeten el principio de la independencia de los expertos. Si bien no cabe duda de que el caso del Sr. Mazilu inquieta a todos, el respeto de la independencia comienza por la designación de expertos que puedan actuar en forma totalmente independiente. Ahora bien, por lo menos nueve de los actuales miembros de la Subcomisión son diplomáticos de carrera y otros seis, al menos, desempeñan una función pública. Esta circunstancia, a pesar de las mejores intenciones, los expone forzosamente a presiones. En el último período de sesiones de la Subcomisión, por ejemplo, al menos tres gobiernos cuyas prácticas en materia de derechos humanos se estaban examinando presionaron a los gobiernos de los países de origen de los expertos, lo cual comportó modificaciones decisivas en las votaciones.

30. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un cometido fundamental porque aportan información sobre las violaciones de los derechos humanos, sea directamente, o por conducto de los relatores y los grupos de trabajo. Como destacó hace una semana el Primer Ministro de la República Francesa, si las organizaciones no gubernamentales no aportaran esa información, las Naciones Unidas no podrían desempeñar su labor. En su último período de sesiones, la Comisión, en su resolución 1988/43, pidió a la Subcomisión que organizara las intervenciones de las organizaciones no gubernamentales y de los observadores a fin de dejar tiempo suficiente para las deliberaciones de sus miembros. Las organizaciones no gubernamentales han comprendido este llamamiento. Así como el orador interviene hoy en nombre de 19 organizaciones, en la Subcomisión se hizo una intervención común sobre la cuestión de las poblaciones indígenas en nombre de 26 organizaciones no gubernamentales y otra, en nombre de un grupo de organizaciones no gubernamentales, sobre los derechos de los enfermos mentales. Convendría que se pudiesen hacer otras declaraciones de este tipo que se refirieran a asuntos de interés común, sin que ello menoscabase los derechos y el estatuto actuales de las organizaciones no gubernamentales o su autonomía individual.

31. Para finalizar, el orador declara que las iniciativas y los procedimientos nuevos aprobados por la Subcomisión han determinado que su último período de sesiones haya sido uno de los más fructuosos.

32. El Sr. ONTIVEROS YULQUILA (Consejo Indio de Sudamérica) declara que, desde 1982, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión realiza una labor muy útil, sobre todo en lo que respecta a las poblaciones indígenas de Sudamérica. En ese continente hay actualmente 560 pueblos indígenas, que representan la mayoría de la población de tres Estados de la región. El Grupo de Trabajo ha realizado muchos esfuerzos para que se reconozca a esas poblaciones, cuando hasta 1980 la mayor parte de los Estados las ignoraban. En la Argentina, por ejemplo, todavía se negaba en 1974 nada menos que la existencia de pueblos indígenas, pero en 1985 el Parlamento argentino reconoció esa existencia y promulgó leyes a su respecto. Asimismo, los 175 pequeños grupos de poblaciones indígenas del Brasil quedaron oficialmente reconocidos en noviembre de 1988 en la Constitución brasileña.

33. Las organizaciones indígenas como la que representa el orador trabajan con el propósito de que en todos los Estados interesados se revisen las disposiciones constitucionales para incorporar en ellas los derechos de los pueblos indígenas y para llegar a una democracia cultural auténtica. Son muchos los países de Sudamérica con población pluricultural. Por tanto, también es conveniente que los Estados sean plurinacionales y pluriculturales.

34. El Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas ha logrado asimismo progresos importantes en lo referente a los tratados concertados entre Estados y poblaciones indígenas. En la mayor parte de los países de Sudamérica no se reconocen los "tratados indios" celebrados con las antiguas Potencias coloniales. Desde 1988, el Consejo Indio de Sudamérica ha emprendido una investigación sobre esta materia, cuyos resultados han sido objeto de un informe.

35. En materia de religión, hay que impedir que las instituciones religiosas, que so pretexto de defender su ideología se dedican en cierto sentido a "desintegrar" las comunidades indígenas, persigan como lo hacen actualmente a unos 400 pueblos de Sudamérica. Los representantes del Vaticano y de otras organizaciones religiosas deben comprender que esos pueblos tienen sus propias religiones.

36. Por último, en el seminario organizado hace poco sobre los efectos del racismo y la discriminación racial en las relaciones sociales y económicas entre poblaciones indígenas y Estados, se subrayó que en Sudamérica existía en estado latente una discriminación racial contra las poblaciones indígenas. Las organizaciones no gubernamentales pueden contribuir a dar a conocer mejor este aspecto del problema, que no se reconoce lo bastante en el marco de las Naciones Unidas.

37. El Sr. MOSES (Gran Consejo de los Crees) recuerda que su organización representa a los pueblos indígenas del Canadá, que ocupan alrededor de la Bahía de Hudson y de la Bahía James, un territorio que representa una vez y media la superficie de Francia. De hecho, en más de las tres cuartas partes del continente canadiense, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. En 1975, el Gran Consejo de los Crees concertó el primer tratado

moderno entre un pueblo indígena y el Gobierno del Canadá: la Convención de la Bahía James y del Quebec septentrional, tratado en cuyo cumplimiento está enpenado actualmente el Gran Consejo. Habida cuenta de su propia experiencia, el Gran Consejo de los Crees estima que la Comisión debe examinar con urgencia la cuestión de la protección de los derechos de los indígenas.

38. Por primera vez, la Comisión ha de examinar un proyecto de declaración universal sobre derechos indígenas, proyecto aprobado por el Consejo Económico y Social en su resolución 1988/36 (documento E/CN.4/Sub.2/1988/25). Ese texto representa la primera respuesta concreta al llamamiento hecho el año pasado en la Subcomisión en nombre de 26 organizaciones no gubernamentales con miras a poner fin al drama de los pueblos indígenas. Los Estados deben comprender ahora que, no obstante los instrumentos internacionales y las leyes nacionales en vigor, la situación de esos pueblos sigue siendo dramática.

39. En el Canadá, por ejemplo, la mortalidad infantil entre las poblaciones indígenas es el doble del promedio nacional. Los intereses económicos predominan inevitablemente sobre la preocupación por los derechos humanos, y la propia política gubernamental se basa en la idea de que el respeto de los derechos de las poblaciones indígenas depende de los recursos que el Gobierno pueda dedicarles. Refiriéndose al caso del apartheid, el orador observa que los intercambios comerciales entre el Canadá y Sudáfrica se duplicaron con creces el año pasado, que por una parte se pretende desalentar al apartheid y que, por la otra, se justifican esas relaciones comerciales por consideraciones de carácter económico. Ahora bien, el respeto de los derechos humanos se mide por un rasero universal. Ya se trate de sanciones contra el apartheid o de tratados celebrados para proteger los derechos de las poblaciones indígenas, jamás hay que preguntarse cuanto costará cumplir sus obligaciones jurídicas y morales. Es indispensable que la adhesión al principio del respeto de los derechos humanos sea absoluta, y no debe contemplarse al respecto ninguna excepción al derecho internacional en materia de derechos humanos, tanto en el caso del Canadá como en el de Sudáfrica. Los Estados deben examinar con ese espíritu el proyecto de declaración que implica un ideal hacia el que todos deben encaminarse.

40. Algunos países con poblaciones indígenas se sienten amenazados por el trabajo que se ha efectuado a ese respecto y temen que los pueblos indígenas aspiren a que se les restituyan sus tierras. Esos países también se preguntan, de hecho, cuánto les va a costar. Esos Estados deben resolver el conflicto que existe entre, por una parte, la necesidad de respetar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y, por la otra, su reticencia profunda a respetar los derechos humanos cuando intervienen consideraciones económicas. Los pueblos indígenas han recurrido a la comunidad internacional para encontrar una protección y evitar el exterminio. Para algunos de ellos ya es demasiado tarde. A este respecto, conviene que la Comisión tenga también en cuenta otras novedades del derecho internacional y, en particular, el informe de la Sra. Daes sobre el estatuto reconocido al individuo y el derecho internacional contemporáneo (E/CN.4/Sub.2/1988/33), del cual se desprende que las obligaciones que incumben al individuo en materia de respeto de los derechos humanos trascienden la obediencia a un Estado. La Sra. Daes recomienda especialmente que se efectúe un estudio sobre el estatuto reconocido a los pueblos y las naciones indígenas en el derecho internacional contemporáneo. En ese mismo sentido, el seminario de las Naciones Unidas sobre los efectos del racismo y la discriminación racial en las relaciones

sociales y económicas entre poblaciones indígenas y Estados, que se realizó en Ginebra en enero, recomendó que se reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de pleno derecho del derecho internacional. Sería conveniente que la Comisión solicitara a la Sra. Daes que le presentase, en su 46° período de sesiones, una versión actualizada de su importante informe, que merecería difundirse como publicación de las Naciones Unidas. Es fundamental que la Sra. Daes prosiga también su trabajo en lo que respecta al proyecto de declaración universal sobre derechos indígenas, como se prevé en la resolución 1988/18 de la Subcomisión, y que presente a ese órgano en su 41° período de sesiones un proyecto revisado en el cual se tengan en cuenta las observaciones recibidas de los Estados y las organizaciones no gubernamentales.

41. Aunque la Comisión manifestó cierta reticencia a proclamar 1992 año internacional para la promoción de los derechos de las poblaciones indígenas, como recomendó inicialmente la Subcomisión, ha aceptado el principio, y la Subcomisión ha propuesto, en su resolución 1988/19, el año 1993. Por último, en su resolución 1988/20, la Subcomisión ha abordado la cuestión del estudio sobre los tratados celebrados entre los Estados y las poblaciones indígenas. El Gran Consejo de los Crees considera que este estudio importante se ha retrasado innecesariamente. Como el Relator Especial, Sr. Alfonso Martínez, está dispuesto a realizar ese trabajo normativo, ya no hay motivos para seguir esperando.

42. Por último, el orador declara que el Gran Consejo de los Crees aprueba la idea de difundir como publicación de las Naciones Unidas el informe del seminario sobre los efectos del racismo y la discriminación racial en las relaciones sociales y económicas entre poblaciones indígenas y Estados. Ello permitiría remediar en parte la ignorancia y la incomprensión que se observan cuando se trata de los problemas que afectan a las poblaciones indígenas.

43. El Sr. BARSH (Consejo de los Cuatro Vientos) cree indispensable que los gobiernos y los pueblos indígenas participen en la elaboración del importante documento normativo que constituye el proyecto de declaración universal sobre derechos indígenas. Cabe felicitarse de que los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales participen cada vez más en los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, lo que permite un intercambio de opiniones abierto y directo entre gobiernos y poblaciones interesadas. La Comisión adoptó en 1985 el principio de este proyecto de declaración, y en 1985 y 1987 el Grupo de Trabajo preparó textos preliminares. A petición de la Subcomisión, la Presidenta del Grupo de Trabajo, Sra. Daes, presentó el verano pasado un primer texto de síntesis que servirá de base a los trabajos futuros. Si bien no parece que el texto tenga que modificarse mucho en el próximo período de sesiones del Grupo de Trabajo, en agosto próximo, es fundamental, en cambio, que los gobiernos y las organizaciones indígenas tengan tiempo suficiente para estudiarlo. Las observaciones y las modificaciones propuestas podrían recapitularse en una versión anotada del proyecto de la Sra. Daes, a partir de la cual podría preverse, a comienzos de 1990, que se elaborase el texto definitivo de la declaración, artículo por artículo.

44. La participación de los gobiernos en las tareas del Grupo de Trabajo ha sido bastante equilibrada desde el punto de vista geográfico, pero se ha observado una cierta sobrerrepresentación regional de algunas poblaciones indígenas. La Subcomisión pidió, en su último período de sesiones, que los resultados de las actividades del Grupo de Trabajo se difundieran más ampliamente, y la Oficina de Información Pública prepara un documento resumido especial sobre las poblaciones indígenas. Los esfuerzos realizados en ese sentido deberían permitir que se redactara una declaración más representativa, mejor equilibrada y más fácil de poner en práctica. El Consejo de los Cuatro Vientos espera que la Comisión aprobará el proyecto de la Sra. Daes y pedirá, como la Subcomisión, que los objetivos, los procedimientos y la labor del Grupo de Trabajo sean objeto de una difusión más amplia, sobre todo entre los pueblos indígenas de las regiones poco representadas.

45. El estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas, confiado por la Comisión el año pasado al Sr. Alfonso Martínez, es muy importante. Por una parte, ese estudio determinará en qué medida las poblaciones indígenas gozaban de determinada personalidad jurídica en el pasado, y si ello contribuyó a proteger sus derechos; por la otra, examinará el interés real y potencial de esos acuerdos por lo que respecta a reglamentar las relaciones de las poblaciones interesadas con los Estados en que viven. No hay nada de revolucionario en la idea de que las consultas, las negociaciones y los acuerdos son muy adecuados para proteger los derechos de las poblaciones indígenas, y este concepto figura en el conocido informe del Sr. Martínez Cobo, en el texto actual del proyecto de declaración universal sobre derechos indígenas, y también en el texto revisado del Convenio N° 107 de la OIT. El estudio del Sr. Alfonso Martínez, que vendrá después de esos textos, permitirá precisar cuáles son los hechos que sirven de contexto a esa idea. Algunos oradores destacaron en el último período de sesiones que el estudio no debería dedicarse tanto a las maldades o a los errores anteriores de los Estados, cuanto a lo que se espera de ellos en el futuro. Sin embargo, hay que comprender el pasado para determinar el camino que se ha de seguir en el porvenir, y nadie debe abrigar dudas sobre el interés de realizar este estudio sin tardanza. En el proyecto de resolución III que presenta a la Comisión, la Subcomisión ha aprobado el plan elaborado por el Sr. Alfonso Martínez. Por último, habida consideración de la importancia del estudio que se ha de efectuar y de las investigaciones que implica, sería conveniente que se previesen créditos para los servicios de un consultor.

46. La idea de proclamar un año internacional para la promoción de los derechos de las poblaciones indígenas fue formulada inicialmente por el Sr. Martínez Cobo en 1983, luego aprobada por la Subcomisión en 1987 y por la Comisión. Aunque esta propuesta obtuvo mucho apoyo en el último período de sesiones de la Asamblea General, no fue objeto de una decisión oficial. A este respecto, cabe recordar que, según las directrices formuladas por la Asamblea General en su resolución 35/424, normalmente este tipo de decisión no se aprueba hasta que se haya examinado durante dos períodos de sesiones sucesivos de la Asamblea General. Por tanto, la decisión definitiva sobre las actividades aludidas debería adoptarse en el próximo período de sesiones de la Asamblea General.

47. Entre tanto, la Subcomisión ha reafirmado su apoyo en su resolución 1988/19. Corresponde ahora a la Comisión transmitir esta recomendación, en forma de un proyecto de resolución, al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General. No obstante, conviene hacer dos observaciones. En primer lugar, el Consejo de los Cuatro Vientos aceptó, con ánimo de avenencia, la propuesta de la Subcomisión de que se proclamara el año 1993, en lugar del año 1992, como deseaban unánimemente las organizaciones indígenas. Es de esperar que la Comisión tendrá en cuenta el espíritu de conciliación manifestado por un gran número de organizaciones indígenas y de Estados. La segunda observación se refiere a los recursos. El Consejo de los Cuatro Vientos, en un documento no oficial, ha empleado expresamente las palabras "recursos existentes". En efecto, según el Consejo se trata de ejecutar los programas ya decididos, pero poniendo de relieve los derechos de los indígenas. En el documento E/CN.4/1989/NGO/14, el Consejo ha presentado un plan de acción detallado para el año previsto. En ese contexto, ha insistido en los programas operacionales de los organismos especializados y en la cooperación técnica con las organizaciones intergubernamentales regionales, en particular la Organización de los Estados Americanos, por razones evidentes, y la Organización de la Unidad Africana. En particular, según el Consejo existe un importante paralelismo entre, por una parte, los que han conocido o conocen a los pueblos indígenas y, por otra parte, la historia reciente de Africa. El Consejo de los Cuatro Vientos confía en que la Comisión no vacilará en emitir una opinión favorable como hizo el año pasado.

48. El seminario sobre los efectos del racismo y la discriminación racial en las relaciones sociales y económicas entre poblaciones indígenas y Estados ha sido el hecho más notable del año pasado, ya que, por una parte, los expertos designados por los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales indígenas participaron en el seminario en un pie de igualdad y, por otra, porque sus conclusiones y recomendaciones se pudieron adoptar por consenso. El orador espera que el jefe Ted Moses, relator del seminario, tendrá la posibilidad de presentar a la Comisión su informe, que debería ser objeto de la más amplia difusión posible. Aunque ese documento no cuente necesariamente con la adhesión total de todos los gobiernos, representa el punto de vista más reciente de una amplia gama de expertos sobre un principio aprobado por todos: el mejoramiento de la situación social y económica de las poblaciones indígenas. Además, el principio de una participación igualitaria, ya mencionado, debería aprobarse sistemáticamente en todos los seminarios técnicos y todas las conferencias sobre estas cuestiones. Por último, los expertos de la Subcomisión pudieron contribuir a ese trabajo normativo gracias a que la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas era miembro nato de las actividades del seminario. Procede ahora que la Secretaría y los gobiernos examinen las recomendaciones formuladas al final de esta reunión. Con todo, se podría organizar ya una conferencia técnica de seguimiento con los organismos especializados, a fin de examinar los medios de fomentar la participación de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo, y no sólo en beneficio de esos pueblos, sino también de la realización de los derechos económicos y sociales en beneficio de todos.

49. Mediante el proyecto de resolución IV, presentado a la Comisión en relación con el programa de servicios de asesoramiento en la esfera de los derechos humanos, la Subcomisión recomienda al Secretario General que considere la posibilidad de incluir en el programa cursos y seminarios para diversas comunidades indígenas. El Secretario General, en el informe

que presentó a la Comisión en 1988 sobre el programa de servicios de asesoramiento, propuso que se incluyera a algunas organizaciones no gubernamentales de importancia nacional entre los grupos previstos en dicho programa. En la medida en que las poblaciones indígenas forman parte de los grupos más vulnerables de la sociedad, ellas parecen prestarse muy adecuadamente a esa actividad, que permitiría experimentar, con pocos gastos, un medio destinado a fortalecer y ampliar las actividades operacionales del Centro de Derechos Humanos.

50. El Sr. de FARIA (Consejo Mundial de la Paz) declara que el Consejo sigue con gran interés los trabajos de la Subcomisión en su 40° período de sesiones. Atribuye una importancia particular a la cuestión de las poblaciones indígenas, y en el próximo período de sesiones de la Subcomisión formulará algunas observaciones acerca del proyecto de declaración universal sobre derechos indígenas (resolución 1988/18). Para ello se basará en el proyecto revisado por la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo encargado de la cuestión, que ya ha preparado un documento notable. El Consejo Mundial de la Paz también se interesa por el proyecto de resolución 1988/20 -más concretamente por la resolución III que se le ha incorporado-, titulado "Estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas"; un estudio así no puede por menos de contribuir notablemente al reconocimiento de derechos de las poblaciones indígenas así como a la elaboración de normas en la materia. Además, es alentador comprobar que el plan elaborado por el Relator Especial (E/CN.4/Sub.2/1988/24/Add.1) ha contado con la aprobación del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas y después de la Subcomisión, y también fue favorablemente acogido por algunos Estados particularmente interesados, como se desprende del informe de la Subcomisión, donde figuran las observaciones de los Estados (E/CN.4/1989/51). El Consejo Mundial de la Paz espera que la Comisión pueda hacer suyas esas decisiones y someter el proyecto de resolución III al Consejo Económico y Social.

51. El Consejo Mundial de la Paz, que atribuye gran importancia a la protección del medio ambiente, condición esencial para el desarrollo y para la paz, ambas cosas propicias al respeto de los derechos humanos, apoya el proyecto de resolución V relativo al traslado y vertimiento de productos y desechos tóxicos y peligrosos. Hace poco el Consejo organizó, en colaboración con organizaciones brasileñas, un seminario internacional sobre la paz, el medio ambiente y el desarrollo, en el curso del cual se subrayó vigorosamente la interdependencia entre el medio ambiente, el desarrollo, el desarme y la paz. Por ello espera que la Comisión de Derechos Humanos apruebe el proyecto de resolución V y lo transmita al Consejo Económico y Social. Ese texto completaría así las resoluciones 43/212 y 43/196 de la Asamblea General, que ha decidido examinar en su cuadragésimo cuarto período de sesiones la cuestión de convocar la reunión de una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo.

52. El Sr. KOLOSSOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que la Subcomisión, órgano de expertos independientes creado por la Comisión hace más de 40 años, es como un laboratorio especializado en el estudio de cuestiones importantes. Su último período de sesiones se distinguió de los precedentes por un claro mejoramiento de los métodos de trabajo y un esfuerzo notable para evitar la politización, como demostró el que 35 de las 40 resoluciones

se aprobaran sin votación. El informe de la Subcomisión (E/CN.4/1989/3), además, destaca el importante concurso de organizaciones no gubernamentales.

53. La Subcomisión recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución sobre el papel de la labor de coordinación desempeñada por el Centro de Derechos Humanos (1988/2), lo cual parece tanto más importante cuanto que el Centro ya ha demostrado hasta qué punto ha contribuido al mejoramiento de la situación internacional en su conjunto, al fortalecimiento del respeto mutuo y de la confianza entre los Estados así como a la comprensión entre los pueblos. La delegación soviética, convencida de la necesidad de encontrar nuevos medios para reforzar aún más ese papel, apoya la recomendación que se hace en el proyecto de decisión de que se examine la cuestión durante el 46° período de sesiones de la Comisión en el marco del tema del programa titulado "Ulterior promoción y fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con inclusión de la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la Comisión (...)".

54. El proyecto de conjunto de principios y garantías para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental (resolución 1988/28) representa una nueva herramienta importantísima para la salvaguarda de los derechos humanos, y la delegación soviética espera que se pueda aprobar en breve y que todos los Estados lo apliquen. En cuanto al proyecto de segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encaminado a abolir la pena de muerte (resolución 1988/22), constituye, con las observaciones de los expertos, una base sólida para la elaboración de un instrumento que sería un factor de progreso. En la Unión Soviética, al igual que en muchos otros países, los medios jurídicos preconizan la abolición de la pena de muerte, pero el conjunto de la sociedad es hostil a ello. Sin embargo, el examen de la legislación penal soviética demuestra que el número de delitos que entrañan la pena de muerte ha sido considerablemente reducido. La delegación soviética aportará su concurso a la elaboración del segundo protocolo, que la delegación espera ayude a hacer evolucionar las mentalidades en la URSS y en otras partes.

55. Esa delegación rinde homenaje al Relator Especial sobre las poblaciones indígenas, cuyo documento enuncia propuestas que pueden aportar una solución a los problemas de esas poblaciones.

56. Es de celebrar que la Subcomisión haya empezado a investigar los medios que permitirían racionalizar sus trabajos y los de la Comisión, así como que haya formulado propuestas concretas en ese sentido.

57. Los documentos de trabajo preparados por el Sr. Varela, la Sra. Palley y el Sr. van Boven se refieren a cuestiones candentes de actualidad que no pueden dejar indiferente a nadie. Sobre el tema de la libertad de religión, en particular, la delegación soviética da todo su apoyo a la resolución 1988/32, por la cual la Subcomisión recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que proyecte la creación de un grupo de trabajo que funcione antes del período de sesiones para estudiar la elaboración de un proyecto de convención sobre la libertad de religión o de convicciones, tanto más cuanto que ello no tendrá ninguna consecuencia financiera.

58. La Subcomisión representa una gran fuente de riqueza intelectual, y todos los documentos que prepara constituyen un nuevo impulso al respeto de las normas relativas a los derechos humanos, tanto en el plano nacional como en el internacional. Es posible seguir mejorando los trabajos de la Subcomisión, que podrían ser más eficaces si se basaran en la búsqueda de soluciones aceptables para todos, lo cual, evidentemente, exige un enfoque totalmente apolítico.

59. El Sr. HERNDL (Observador de Austria) está convencido de que las actividades de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión deben complementarse entre sí. La Subcomisión debe, pues, efectuar determinadas tareas que es preferible confiar a expertos independientes más bien que a representantes de Estados: estudios e informes, instrumentos normativos y muy especialmente etapas iniciales del procedimiento establecido por el Consejo Económico y Social en su resolución 1503 (XLVIII). La condición de expertos independientes de que gozan sus miembros hace que la Subcomisión sea un órgano técnico influyente, que puede incluso proponer a la Comisión nuevos temas de estudio y presentarle proyectos de instrumentos bien concebidos. La Comisión, por su parte, tiene el deber de orientar y aconsejar a la Subcomisión sobre las actividades complementarias que debe emprender, y convendría que estuviera mejor informada de la forma en que su órgano auxiliar aplica sus sugerencias, pues esas actividades de seguimiento no aparecen siempre con claridad en el informe, y la delegación de Austria lamenta, a ese respecto, que el Presidente de la Subcomisión en su 40° período de sesiones, a quien parecería incumbir esa tarea, no haya podido presentar el informe antes de que la Comisión iniciara el debate sobre el tema. Si se repitiera una situación así, convendría que el Presidente hiciera llegar de antemano a la Comisión sus observaciones por escrito.

60. En su 40° período de sesiones, la Subcomisión se ocupó, una vez más, de una amplia gama de temas, y, en conjunto, obtuvo resultados fecundos y alentadores. Se ocupó de la situación en varios países, inició el estudio de diversos temas nuevos, elaboró un proyecto de declaración sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial, a petición de la Comisión reanudó el estudio del tema de las prácticas tradicionales, y progresó en el trabajo que había emprendido en relación con un proyecto de declaración sobre derechos indígenas. La delegación de Austria está convencida de que la diligencia del Relator Especial en el tema de las poblaciones indígenas permitirá a la Subcomisión presentar dentro de muy poco un texto revisado de una declaración encaminada a defender los derechos de este grupo vulnerable de la población mundial.

61. El Gobierno de Austria siempre ha sido sumamente favorable a la elaboración de un segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, ya que considera que ese castigo es una forma de trato cruel, inhumano y degradante, cuyo mantenimiento nadie debería desear. El carácter facultativo del instrumento propuesto demuestra, sin embargo, que ningún Estado debe ni puede verse obligado a comprometerse a abolir la pena de muerte, pero, en cambio, no se puede impedir que quienes quieran asumir ese compromiso lo hagan. La delegación de Austria espera que los miembros de la Comisión podrán ponerse de acuerdo, por lo menos, sobre el principio de la elaboración de ese Protocolo, que debería quedar definitivamente redactado lo antes posible, como permite

hacerlo el excelente texto preparado por el Sr. Bossuyt. La Comisión debe pronunciarse en el actual período de sesiones, ya que el protocolo facultativo constituiría un hito importante en la trayectoria de un respeto auténtico de los derechos humanos.

62. A la delegación de Austria le preocupa el destino de un ex miembro de la Subcomisión, el Sr. Mazilu -encargado del estudio sobre los derechos humanos y la juventud-, a quien el Gobierno de Rumania no ha autorizado a asistir al 40° período de sesiones de la Subcomisión, en violación de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas. La Comisión debe ocuparse de este asunto y, como sugiere la Subcomisión en su resolución 1988/37, adoptar medidas para que se pueda solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre este tema. Este asunto revela una violación de derechos humanos ante la cual la Comisión debe reaccionar.

63. El Sr. ADLING (República Democrática Alemana) opina que la Subcomisión en su 40° período de sesiones, ha hecho un esfuerzo considerable para respetar mejor su mandato y dejar a la Comisión la tarea de adoptar las decisiones de carácter político. Por eso es de celebrar que haya concedido más atención a los aspectos teóricos de los temas fundamentales, evitando a la vez los enfrentamientos de orden político. Esa nueva actitud no puede por menos de influir positivamente en las relaciones internacionales.

64. La delegación de la República Democrática Alemana cree, al igual que algunos expertos de la Subcomisión, que se debe alentar a las organizaciones no gubernamentales a participar de la manera más constructiva posible en las actividades de la Comisión. Aunque sea necesario tratar, a título de ejemplo, de algún caso particular, ello no debe ser óbice para la búsqueda de propuestas concretas encaminadas a resolver los problemas cuya importancia reconocen todos. Al insistir en la necesidad de resolver esos problemas, al proponer soluciones concretas, al dedicarse a analizar las normas en vigor, las organizaciones no gubernamentales aportarían un concurso mucho más valioso y contribuirían a ayudar a la Subcomisión a cumplir plenamente su mandato de órgano consultivo. En su documento de trabajo titulado "Examen de la labor de la Subcomisión" (E/CN.4/Sub.2/1988/WP.1) los dos expertos de la Subcomisión exponen sus ideas, pero formulan propuestas que van mucho más allá. Proponen, de hecho, un nuevo procedimiento para tratar situaciones que revelan violaciones de derechos humanos. Evidentemente, es aconsejable eliminar la duplicación de los trabajos de la Comisión y abordar las violaciones de derechos humanos de manera más directa, pero el procedimiento previsto en el documento de trabajo mencionado no se puede considerar satisfactorio. En la práctica, cuando una ONG acusara a un Estado de haber cometido violaciones de derechos humanos -sea o no justificada la alegación-, la Subcomisión transmitiría a la Comisión la acusación tal como la hubiera recibido y, como la Subcomisión no está facultada para investigar, la ONG se vería obligada a asumir el papel de acusador mientras que el Estado de que se trate se convertiría en defensor, lo que llevaría a una situación inextricable. Más grave aún es que el procedimiento propuesto no se vincula a ningún instrumento preciso de defensa de los derechos humanos; sin embargo, aparte de las situaciones que revelan violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, los órganos de las Naciones Unidas siempre tratan de determinar si los Estados han faltado a las obligaciones que han contraído al adherirse a determinado instrumento. Por otra parte, no es casualidad que los órganos

encargados de vigilar la aplicación de los diversos pactos y convenciones obtengan resultados mucho mejores que los considerados principalmente destinados a promover la cooperación entre gobiernos en materia de derechos humanos. Por la misma razón, la resolución 8 (XXIII) de la Comisión ha servido de base para la preparación de procedimientos concretos destinados a facilitar la lucha contra las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos. La delegación de la República Democrática Alemana considera que, como se ha argumentado muchas veces en la Subcomisión, la resolución 8 (XXIII) ya no puede servir de base para la adopción de procedimientos nuevos. La práctica ha demostrado ya cómo entienden los Estados Miembros de las Naciones Unidas que deben ponerse en práctica las ideas que se desprenden de esa resolución.

65. En cuanto a los resultados de los trabajos de la Subcomisión en su 40° período de sesiones, la delegación de la República Democrática Alemana ha recibido con particular satisfacción el informe del Sr. Khalifa sobre las consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta al régimen colonialista y racista de Sudáfrica (E/CN.4/Sub.2/1988/6 y Add.1), informe que será útil a todos los que están decididos a luchar contra la colusión de las sociedades transnacionales, de los bancos y de las empresas de seguros con el régimen de apartheid. Esta delegación se felicita, además, de los progresos logrados en la elaboración de un proyecto de declaración universal sobre derechos indígenas, así como en la designación de un relator especial para llevar a cabo el estudio sobre la utilidad potencial de los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre las poblaciones indígenas y los gobiernos (resolución III). Esas cuestiones tienen una importancia particular para las poblaciones indígenas de todo el mundo, y conviene que la comunidad internacional tome postura.

66. La delegación de la República Democrática Alemana espera con interés la aparición del estudio sobre los problemas, las políticas y las medidas positivas vinculadas a una realización más efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, estudio confiado a un relator especial a quien la Subcomisión encomienda, en su resolución 1988/33, tener en cuenta diferentes principios rectores u otros elementos. Entre estos últimos, habría que citar, en particular, los informes de los Sres. Ganji, Ferrero y Eide. El estudio permitirá comprender mejor la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

67. La Subcomisión, órgano auxiliar de la Comisión, tendrá ante sí tareas tan delicadas como interesantes. Para cumplirlas deberá perseverar en el camino que se ha trazado en su 40° período de sesiones, y esforzarse por examinar sin apasionamiento los temas que figuran en su programa.

68. El Sr. ZAMIR (Bangladesh) dice que el informe de la Subcomisión sobre su 40° período de sesiones (E/CN.4/1989/3) refleja el diálogo constructivo que han mantenido sus miembros durante el período de sesiones. Período sumamente fecundo, pues culminó con la aprobación de propuestas y documentos sumamente importantes. Bangladesh no cuenta ya con un experto entre los miembros de la Subcomisión, pero ha cooperado, como Estado observador, en los trabajos de ese órgano.

69. La delegación de Bangladesh acoge con satisfacción el plan elaborado por el Sr. Alfonso Martínez para el estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas. A su juicio, ese estudio debería referirse únicamente a las poblaciones indígenas reconocidas como tales, las cuales no deben confundirse con las minorías u otros grupos análogos. Tampoco debería suponer una duplicación del informe del Sr. José R. Martínez Cobo, Relator Especial encargado de estudiar el problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. Dado que la expresión "otros acuerdos constructivos entre las poblaciones indígenas y los gobiernos", que figura en el párrafo 1 de la resolución 1988/56 de la Comisión, es bastante vaga, el Relator Especial no debería perder de vista, en su estudio, la perspectiva con que se abordó inicialmente el problema. Por último, como se estipula en el párrafo 2 de la misma resolución, habrá que tener siempre en cuenta en todos los aspectos del estudio, comprendidas las recomendaciones, las realidades socioeconómicas de los Estados y la inviolabilidad de su soberanía.

70. En lo que atañe al proyecto de segundo protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encaminado a la abolición de la pena de muerte, proyecto que la Subcomisión decidió por consenso transmitir a la Comisión, la delegación de Bangladesh desea puntualizar que en Bangladesh, país donde sigue vigente la pena capital, la práctica y los procedimientos jurídicos se ajustan a las recomendaciones relativas a los derechos del acusado, aprobadas por la Asamblea General en su resolución 2393 (XXIII), de fecha 26 de noviembre de 1968. Se prevén también penas sustitutorias en casi todos los casos, e incluso después de agotar los recursos jurídicos disponibles contra la sentencia, los condenados a muerte pueden elevar un recurso de gracia al Jefe del Estado al amparo del artículo 57 de la Constitución. Gracias a las garantías existentes muy rara vez se ejecutan las penas de muerte impuestas.

71. La Sra. MAO (China) declara que el informe de la Subcomisión sobre su 40º período de sesiones (E/CN.4/1989/3) muestra el trabajo considerable que han realizado sus miembros y los positivos resultados obtenidos. La delegación de China toma nota con satisfacción de que la Subcomisión no cesa en su empeño de combatir el racismo y el apartheid. En su informe (E/CN.4/Sub.2/1988/6 y Add.1), el Sr. Khalifa subraya la necesidad de que la comunidad internacional imponga sanciones globales a Sudáfrica. Por otra parte, los trabajos del Sr. Eide sobre los resultados obtenidos y los obstáculos encontrados durante el Primer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial deberían repercutir favorablemente en la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para el Segundo Decenio. La delegación de China aprueba la decisión de la Subcomisión de pedir al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos que envíe un telegrama al Gobierno de Sudáfrica para exigirle que ponga inmediatamente en libertad a los dirigentes negros de los movimientos de oposición a la discriminación racial, y la de recomendar la candidatura del Sr. Nelson Mandela al Comité Especial encargado de seleccionar a los ganadores del Premio de Derechos Humanos. Aprueba también las sugerencias formuladas por la Subcomisión en su resolución 1988/6 sobre principios y medidas para combatir el racismo y la discriminación racial. Cabría, por ejemplo, establecer o reforzar los mecanismos adecuados para eliminar el racismo en todos los países, dar mayor difusión a los instrumentos internacionales relativos a la lucha contra el racismo, y organizar seminarios sobre las manifestaciones y las causas del racismo.

72. La delegación de China apoya las actividades de la Subcomisión encaminadas a proteger los derechos de las poblaciones indígenas y, en particular el proyecto de declaración sobre derechos de los indígenas, presentado por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. A su juicio, la Comisión y el Consejo Económico y Social deberían atribuir gran importancia a los diversos trabajos iniciados al respecto, por la Subcomisión, como el estudio encomendado al Sr. Alfonso Martínez, y el Secretario General debería prestar a la Subcomisión y al Grupo de Trabajo toda la asistencia necesaria para que pueda desempeñar su mandato. La delegación de China hace también suya la propuesta de proclamar en 1993 un año internacional para la promoción de los derechos de las poblaciones indígenas, propuesta formulada por la Subcomisión en su resolución 1988/19, y espera que esa iniciativa encuentre amplio eco en la comunidad internacional.

73. La delegación de China acoge favorablemente la idea de convertir al Centro de Derechos Humanos en la dependencia de coordinación de los organismos del sistema que se ocupan de la protección y la promoción de los derechos humanos. Cree que en el desempeño de su cometido el Centro debería hacer constantes esfuerzos para perfeccionar su actividad, y sobre todo contratar personal conforme al principio de una distribución geográfica equitativa, a fin de coordinar y reflejar mejor las exigencias y los intereses de regiones y países que poseen tradiciones culturales y sistemas políticos, económicos y jurídicos diferentes.

74. Dada la importancia del papel que desempeña la Subcomisión es indispensable que se siga tratando de mejorar sus métodos de trabajo y de aumentar su eficacia. La propia Subcomisión ha decidido revisar su labor cada dos años, a partir de su 41º período de sesiones. La delegación de China espera que la institucionalización del mecanismo de revisión y mejora permita a la Subcomisión contribuir todavía más a las actividades que se desarrollan en materia de derechos humanos y, en particular, a las medidas destinadas a poner fin a las violaciones masivas y flagrantes de esos derechos.

75. El Sr. GOSHU (Etiopía) considera que el informe de la Subcomisión sobre su 40º período de sesiones (E/CN.4/1989/3) muestra que sus miembros han trabajado seriamente y que aquélla se esfuerza por desarrollar y promover los derechos humanos.

76. Su delegación atribuye especial importancia al proyecto de resolución II, que figura en la sección A del capítulo I del informe. No duda que el Relator Especial continuará actualizando la lista de instituciones financieras, empresas transnacionales y demás organizaciones que colaboran con el régimen racista de Sudáfrica, pero cree que una exposición más precisa de las actividades de las empresas transnacionales habría dado mayor peso al proyecto de resolución 1988/3 de la Subcomisión.

77. La resolución 1988/104, relativa al examen de la labor de la Subcomisión, contiene varias sugerencias pertinentes, y al respecto la delegación de Etiopía toma nota con satisfacción del esfuerzo constante que se hace para organizar más eficazmente la labor de la Subcomisión. Sin embargo, para dar aún más valor a las actividades de ese órgano, habría que definir con mayor claridad su papel y evaluar y racionalizar sus métodos de trabajo. La Subcomisión tiene el mandato de recabar opiniones de expertos independientes

sobre las grandes cuestiones relativas a derechos humanos que le presente la Comisión. Ahora bien, a lo largo de los años se ha ido apartando poco a poco de ese mandato, pues aborda cuestiones que exceden del marco de su competencia y que ya examinan otros órganos, y sus debates están cada día más politizados. Conviene, pues, que se ponga remedio a esta situación.

78. En lo que respecta a la realización de estudios, que es una de las funciones importantes de la Subcomisión, aunque la delegación de Etiopía no niega la utilidad de esa tarea, cree que la ejecución de varios estudios al mismo tiempo aumenta desmesuradamente el volumen de trabajo de la Subcomisión, lo que podría afectar a la calidad de sus tareas. Opina que los futuros estudios deberían centrarse en un número determinado de cuestiones, y no debería iniciarse un nuevo estudio mientras no se ultimaran los ya autorizados. Habría que mejorar los métodos de trabajo de la Subcomisión, y a este respecto la delegación de Etiopía aprueba la propuesta de la propia Subcomisión de revisar su labor cada dos años.

79. La mejora de los resultados de las actividades de la Subcomisión depende sobre todo de que se adquiera conciencia de los defectos de que adolecen sus métodos de trabajo. Ha llegado, pues, el momento de que la Comisión estudie los medios que permitirían racionalizar las actividades de ese órgano.

80. El Sr. LIVERMORE (Canadá) señala que la Subcomisión, creada en principio para realizar estudios sobre prevención de discriminaciones y protección a las minorías, se ha ido transformando con los años en un órgano cuyas funciones abarcan todo el proceso de promoción y desarrollo de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Ha llegado, pues, el momento de reconsiderar su funcionamiento. Tal es el propósito de la resolución 1988/43, aprobada por la Comisión en su 44º período de sesiones a propuesta de varios copatrocinadores, entre ellos el Canadá, resolución que contiene directrices y sugerencias sobre el modo en que la Subcomisión podría racionalizar y simplificar sus trabajos. La delegación del Canadá volverá a referirse a esto cuando se disponga del informe del Presidente de la Subcomisión sobre la aplicación de las directrices formuladas por la Comisión en dicha resolución. Pero quiere hacer ya algunas sugerencias sobre tres aspectos importantes.

81. En primer lugar, y como la Subcomisión tiene un programa cada vez más recargado, insta a los miembros de la Comisión -y de la propia Subcomisión- a que den pruebas de la mayor moderación posible, y se abstengan de proponer nuevos temas de estudio por la Subcomisión. Esta, a su vez, no debería someter a la Comisión propuestas que no haya podido examinar a fondo. En segundo lugar, y vista la abrumadora carga de trabajo que han de soportar las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, es esencial que se eviten las duplicaciones. La Subcomisión podría contribuir a ese esfuerzo si adopta un método de trabajo distinto del que siguen determinados órganos políticos, como la Comisión o la Asamblea General. Por ejemplo, en lugar de concentrarse en la aprobación de resoluciones, debería centrar sus esfuerzos en la elaboración de un informe que ofreciera un resumen de las deliberaciones de sus miembros sobre los temas examinados, lo que respondería mejor al papel que la Subcomisión está llamada a desempeñar y que es el de órgano encargado de aportar opiniones de expertos. Por último, y sobre todo, es indispensable que se respete el principio de la independencia de los expertos que integran la Subcomisión, pues la progresiva politización de los debates de ese órgano

hace que muchos se muestren escépticos sobre el auténtico valor de sus trabajos. A este problema hay que añadir el de las presiones que a veces ejercen determinados gobiernos sobre los expertos que designan. El caso del experto rumano, Sr. Mazilu, es una muestra especialmente deplorable de este fenómeno, y la delegación del Canadá espera sinceramente que la Secretaría dé cuenta de los contactos que ha mantenido al respecto con el Gobierno de Rumania. Espera también que la Comisión se decida a actuar si esos contactos no dan resultado. Pese a estos problemas, en su último período de sesiones la Comisión ha logrado progresos en el examen de varias cuestiones importantes. La delegación del Canadá se congratula al respecto de que haya podido concluirse el proyecto de principios y garantías para la protección de los enfermos mentales, y espera que la Comisión pueda adoptar las medidas necesarias para culminar la labor que se desarrolla en esta esfera.

82. El Canadá está especialmente interesado en las actividades del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, en las que participa activamente. Felicita a la Sra. Daes por los esfuerzos que realiza para elaborar el proyecto de principios y párrafos de preámbulo que podrían incluirse en un proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas. La delegación del Canadá insta a los gobiernos, así como a los representantes de los pueblos indígenas y de otros grupos interesados, a que estudien detenidamente el proyecto y formulen comentarios al respecto conforme a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 5 de la resolución 1988/18 de la Subcomisión. En lo que atañe al estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas, la delegación del Canadá no va a repetir los comentarios que ya ha formulado a petición de la Comisión, sobre este proyecto de estudio. Se congratula empero, de que el Relator Especial esté considerando la posibilidad de adoptar un enfoque universal, lo que, a su juicio, se ajustaría al mandato del Grupo de Trabajo. Celebra, además, que en la resolución se mencione el Fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las poblaciones indígenas, al que el Canadá contribuye. Ese fondo desempeña también, a su juicio, un papel capital a la hora de tener en cuenta las necesidades y las situaciones de las comunidades indígenas del mundo entero con miras a la elaboración de normas de ámbito universal. Por último, el Canadá aprueba los trabajos de la Subcomisión sobre la independencia del poder judicial, así como la sugerencia de que se devuelva el estudio del Sr. Singhvi al Comité de Prevención del Delito y al Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente para que sigan examinándolo.

83. La delegación del Canadá opina que los progresos logrados por la Subcomisión en su 40º período de sesiones no carecen de relación con algunos acontecimientos políticos de mayor alcance que han potenciado la cooperación en muchas instancias internacionales. La Comisión debería aplaudir y fomentar esta nueva tendencia, pero debe seguir impartiendo a la Subcomisión directrices que le permitan adaptar su programa y sus métodos de trabajo a las necesidades de la Organización, que evolucionan constantemente. Por su parte, el Canadá continuará ayudando a la Subcomisión en esta empresa.

Se levanta la sesión a las 13 horas.